

Año: 2013

Expediente: 8153/LXXIII

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXIII Legislatura

PROMOVENTE: GRUPO DE CIUDADANOS

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO SIGNADO POR UN GRUPO DE CIUDADANOS MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN AL ARTÍCULO 20 INCISO B) FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU SIMILAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REFERENTE AL PROCESO PENAL ACUSATORIO.

INICIADO EN SESIÓN: 07 de octubre del 2013

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos Constitucionales y Justicia y Seguridad Pública.

Lic. Baltazar Martínez Montemayor

Oficial Mayor

Año: 2013

Expediente: 8153/LXXIII

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXIII Legislatura

PROMOVENTE: GRUPO DE CIUDADANOS

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO SIGNADO POR UN GRUPO DE CIUDADANOS MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN AL ARTÍCULO 20 INCISO B) FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU SIMILAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REFERENTE AL PROCESO PENAL ACUSATORIO.

INICIADO EN SESIÓN: 07 de octubre del 2013

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos Constitucionales y Justicia y Seguridad Pública.

Lic. Baltazar Martínez Montemayor

Oficial Mayor

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
P R E S E N T E .



YURI MARISOL LARA HERNANDEZ, SONIA NALLELY URRUTIA OLMEDO, FERNANDO DE LA CRUZ TORREBLANCA, ALDO JAZMANI NAVARRO VAZQUEZ, ERNESTO FRANCISCO GARCIA SALINAS. Mexicanos, mayores de edad, estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León,

FUNDAMENTACION.-

De conformidad con el artículo 71 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 36 fracción III de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, se nos otorga el derecho de iniciativa propia ante este congreso. Formulamos **INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN AL ARTÍCULO 20 INCISO B FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** y su similar en la Constitución Política del Estado de Nuevo León para que sea agregada una adición constitucional relevante y haga de mayor claridad y precisión a su interpretación conforme a los siguientes datos:

JUSTIFICACION.-

anv
recibí 17:48
04/10/13

recibí
04/10/13
10:12 hrs

La implementación de la reforma constitucional del artículo 20 Inciso B fracción II carece de un elemento integrador para darle mayor claridad a la precisión de su interpretación a dicha norma constitucional.

OBJETIVOS.-

Esencialmente se pretende que los operadores del nuevo sistema de justicia acusatorio y oral tengan la interpretación empírica y material para darle una eficacia jurídica, al ámbito de la defensa adecuada y al debido proceso cuando se trate de la detención de personas.

DESARROLLO TEMATICO.-

La reforma por adición al artículo 20, inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obedece a precisar quién es el encargado de hacer saber los motivos de la detención así como el derecho a guardar silencio al imputado. Es decir, con la reforma lo que se pretende conseguir es el otorgar la certeza jurídica al imputado respecto de la persona encargada de hacerle de su conocimiento el motivo por el cual fue aprehendido y de su derecho a guardar silencio.

Ciertamente, al precisar por la propia Carta Magna quién es la persona encargada de hacer del conocimiento del imputado el motivo por el cual fue aprehendido y su derecho a guardar silencio, se le otorga certeza jurídica toda vez que es precisamente la persona que lo aprehende el encargado de comunicárselo y el todo caso el imputado actuará en consecuencia de acuerdo a sus intereses. Así las cosas, la modificación a nuestra Carta Magna otorga, de manera adicional, la certidumbre a los órganos encargados de administrar la justicia en nuestro país, respecto de la persona encargada de hacer del conocimiento del imputado el motivo por el cual fue aprehendido y su derecho a guardar silencio.

Lo anterior es así, toda vez que al realizarse la precisión, y en todo caso a cuando se actualice la hipótesis normativa de referencia y que el aprehensor haga del conocimiento del imputado sus derechos, se estará subsanando un vicio que pudiera tener fatales consecuencias para la sociedad.

Ciertamente, el imputado puede hacer valer mediante juicio de garantías el hecho de que ninguna persona hizo del conocimiento sus derechos, antes precisados, o en su caso, que fue una persona distinta al que lo aprehendió, y mediante ese vicio procesal obtener su libertad.

Es cierto que algunos órganos encargados de administrar la justicia en nuestro país, consideraban erróneamente que alguien más había hecho del conocimiento del imputado los derechos de referencia, y este a su vez basado en esa presunción no se los comunicaba lo cual evidentemente violada sus derechos toda vez que nadie se los hacía saber y por ende, el imputado no podía realizar acción algún que favoreciera sus intereses.

Adicional a lo antes precisado, la reforma constitucional de referencia, supondrá una institucionalización de los órganos encargados de administrar justicia en nuestro país al conocer de manera indubitable quién es el encargado de hacer del conocimiento del imputado sus derechos y se elimine de facto la incertidumbre que esto generaba. Ahora bien, la excepción aplica toda vez que una persona que no forma parte de una autoridad judicial, puede llevar a cabo un arresto, y resulta evidente que esa persona no conoce el procedimiento formal jurídico para llevar a cabo la tarea de referencia, si no que lo hace bajo algún tipo de miedo o presión por poner a salvo su vida o su patrimonio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se basa en que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; sin embargo, en su artículo 20 no queda estipulada la persona indicada a informar del derecho que tiene el detenido para declarar o guardar silencio, por lo que no se estaría promoviendo y respetando un derecho.

El no señalar a la persona indicada de dar a conocer los derechos antes mencionados al detenido, no va en línea con los valores plasmados en nuestra Constitución. Radica en ello la fundamental importancia de reformar el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que, en lugar de sólo contemplar el derecho del detenido a declarar o guardar silencio, se especifique quién es la persona quien le hará saber ese derecho y se señale en qué caso se excepciona.

Esta propuesta es congruente con los avances en los derechos humanos en las últimas reformas constitucionales en donde se especifica que los tribunales de la federación tendrán que resolver los actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución; es decir, con esta reforma se busca darle seguridad jurídica al detenido sobre persona encargada de hacerle saber el motivo por el cual fue aprehendido y de su derecho a declarar o guardar silencio.

El debido proceso que constituye un límite a la actividad del estado. Se refiere al conjunto de requisitos que deben de observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado que pueda afectarlos. En materia penal consiste en que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.

La Corte Internacional se ha pronunciado en el sentido de que este abarca varios extremos, entre ellos el derecho a ser oídos con las debidas garantías y dentro de plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos.

El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe de respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener acceso a ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.

La sociedad, tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer la pretensión de justicia que permitan mantener el orden social. No existe un catálogo estricto o limitativo de garantías que se consideren como pertenencias al debido proceso. Sin embargo, en general, pueden considerarse las siguientes como las más importantes:

- A. Derecho a un Juez imparcial.
- B. Legalidad de la sentencia judicial.
- C. Derecho a asistencia letrada.

Es precisamente el derecho a la asistencia letrada el que nos obliga a formalizar de manera específica la iniciativa de reforma a la fracción II del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al hacer específico el actuar de la autoridad correspondiente, de manera que le obliga a respetar esta asistencia

brindando la oportunidad al presunto inculpado de no declarar hasta tener esta asistencia letrada. Permitiendo de esa manera que este último no quede en un estado de indefensión.

PROUESTA ESPECIFICA.-

NORMA ACTUAL:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

...

B. De los derechos de toda persona imputada:

...

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

...”.

NORMA PROPUESTA:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

...

B. De los derechos de toda persona imputada:

...

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber por el aprehensor los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

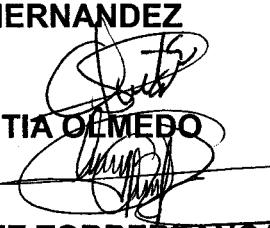
Para efectos de lo anterior, se excepciona de hacer saber de los motivo de la detención así como su derecho de guardar silencio cuando se trate de detención ciudadana.

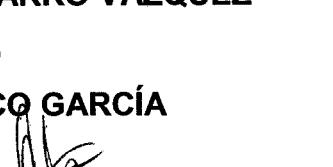
...”.

PETITORIOS.-

Consecuentemente honorable legisladores, en los términos precisados se solicita se admita la presente iniciativa, se envíe al pleno del congreso para los procedimientos legislativos correspondientes y finalmente conformar al derecho parlamentario, **se expida un dictamen que apruebe esta iniciativa y se incluya en las constituciones y se decrete la promulgación constitucional prevista en esta propuesta.**

ATENTAMENTE.-


YURI MARISOL LARA HERNANDEZ
MATRÍCULA 1021246

SONIA NALLELY URRUTIA DEMEDO
MATRÍCULA 1149822
FERNANDO DE LA CRUZ TORREBLANCA
MATRÍCULA 1005234


ALDO JAZMANI NAVARRO VAZQUEZ
MATRÍCULA 0955318

ERNESTO FRANCISCO GARCÍA
SALINAS
MATRÍCULA 1540441


DOCTOR MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ.

